



Universitat
Oberta
de Catalunya

Federalismo en países autoritarios: ¿Hacia una descentralización sin partidos?

Jorge García Santos

Máster en Análisis Político | Universitat Oberta de Catalunya

DIRECTOR: Iván Serrano Balaguer

PRA: Rosa Borge Bravo

TIPOLOGÍA: Profesional

FECHA: 22/06/2018

© The LIFE Picture Collection Getty Images

Índice

Introducción.....	4
Marco Teórico.....	7
Metodología.....	11
Análisis y resultados de los casos.....	16
Conclusiones.....	36
Bibliografía.....	40

Resumen

Nuestra investigación tiene el objetivo de responder a la conocida paradoja de Brancati, esto es, que los efectos positivos que la aplicación del federalismo tiene en los niveles de conflicto étnico se ve contrarrestada por la acción de los partidos regionales. La utilización de los recursos públicos por parte de estos partidos les permitiría fortalecer su posición, pudiendo plantear nuevos retos al gobierno federal y provocando efectos nocivos en la convivencia. Partiendo de un contrafáctico, un sistema de federalismo autoritario en el que la presencia de partidos regionales no esté asegurada, buscamos comprobar si la ausencia de estos tiene algún efecto en la reducción del conflicto étnico en países culturalmente diversos. Además, también comprobaremos una serie de herramientas de las que se dotan los ejecutivos centrales en los sistemas de "federalismo centralizado", de forma que podamos comprobar la efectividad de estas medidas para mejorar la convivencia. A través de un análisis comparado entre cuatro países similares, buscaremos responder a nuestra pregunta de investigación: ¿Favorece la inexistencia de partidos regionales el éxito de los países autoritarios en la aplicación de las políticas de descentralización?

Abstract

Our research aims to answer the well-known Paradox of Brancati, this is, that the positive effects that the application of federalism has on the levels of ethnic conflict are counteracted by the action of the regional parties. The use of public resources by these parties would allow them to strengthen their position, may pose new challenges to the federal government and causing harmful effects on coexistence. Starting from a counterfactual, a system of authoritarian federalism in which the presence of regional parties is not assured, we seek to verify if the absence of these has any effect in reducing ethnic conflict in culturally diverse countries. In addition, we will also check some tools provided by the central executives in the systems of "centralized federalism", so that we can verify the effectiveness of these measures to improve coexistence. Through a comparative analysis between four similar countries, we will seek to answer our research

question: Does the absence of regional parties favor the success of authoritarian countries in the application of decentralization policies?

Resum

La nostra recerca té l'objectiu de respondre a la coneguda paradoxa de Brancati, és a dir, que els efectes positius que l'aplicació del federalisme té en els nivells de conflicte ètnic es veu contrarestada per l'acció dels partits regionals. La utilització dels recursos públics per part d'aquests partits els permetria enfortir la seva posició, i pot plantejar nous reptes al govern federal, provocant efectes nocius en la convivència. Partint d'un contrafàctic, un sistema de federalisme autoritari en què la presència de partits regionals no estigui assegurada, busquem comprovar si l'absència d'aquests té algun efecte en la reducció del conflicte ètnic en països culturalment diversos. A més, també comprovarem una sèrie d'eines de les que es doten els executius centrals en els sistemes de "federalisme centralitzat", de manera que puguem comprovar l'efectivitat d'aquestes mesures per millorar la convivència. A través d'una anàlisi comparada entre quatre països similars, buscarem respondre a la nostra pregunta de recerca: ¿Afavoreix la inexistència de partits regionals l'èxit dels països autoritaris en l'aplicació de les polítiques de descentralització?

Palabras clave: Federalismo, Autoritarismo, Centralización, Partidos regionales, Conflicto étnico.

1. Introducción

El estudio del federalismo como forma de gobierno ha cobrado vida como un amplísimo subcampo dentro de la Ciencia Política. En sus orígenes, importantes figuras políticas como James Madison defendieron la idoneidad de la causa federal para dotar de protección a unas minorías cuya libertad podía peligrar ante el poder del estado central. De una forma más específica, autores como Daniel Elazar han considerado las políticas federales como la mejor herramienta para favorecer la preservación de lenguas, culturas y religiones que, minoritarias dentro del seno de un estado, tendrían grandes posibilidades de quedar relegadas a la desaparición.

Otros enfoques se han centrado en el aumento de la participación democrática provocado por un gobierno más cercano al ciudadano (Mill 1861), o en la posibilidad de aumentar el número de alternativas políticas mediante la multiplicación de entes administrativos con soluciones diversas (Rose-Ackerman 1980).

Alejándonos de los aspectos normativos, el abanico de preguntas es aún más extenso. ¿Es la descentralización un mecanismo efectivo para resolver los conflictos étnicos? ¿mejora el desempeño económico, o genera desigualdades intraestatales? ¿Son más estables las federaciones centralizadas que las periféricas? ¿Qué relaciones mantienen el gobierno central y las élites regionales? Estas preguntas, en sus diversas variantes, han sembrado las semillas necesarias para un florecimiento académico construido en torno a la temática federal. No nos encontramos ante cuestiones originales o novedosas, pero sí inacabadas con respecto a las respuestas que podrían recibir. El motivo podría estribar, además de en el carácter complejo de las preguntas, en la controvertida afirmación de que “one can prove, or disprove, almost any proposition about decentralization by throwing together some set of cases or data” (Faguet, 2013: 54).

El federalismo fue, en sus inicios, una disciplina aplicada a sistemas políticos con democracia representativa. Los modelos federales por antonomasia, como Suiza o Estados Unidos, representaban la construcción de un estado mediante la confederación libre y acordada de diferentes regiones, originando el concepto de federalismo coming-together. Frente a las monarquías autoritarias todavía existentes en Europa, el modelo federal parecía prevenir la temida concentración del poder en una minoría gobernante, al mismo tiempo que respetaba la autonomía político-económica de las diversas regiones agregadas. Ciertamente, una revisión de los modelos autoritarios presentes en los siglos XVIII y XIX puede trasladarnos el escaso interés que los gobernantes de Europa Occidental tenían por el reparto competencial. Deseosos de barrer todo vestigio de un feudalismo asociado a las notables cuotas de poder de nobles y clérigos, la construcción de un estado-nación centralizado era considerado como un sinónimo de modernización.

La reduccionista relación entre democracia y federalismo comenzó a desmoronarse con el estudio de diferentes modelos históricos en los que, de manera obligada por su carácter de imperios multiétnicos, algunos gobernantes

habían decidido emplear estructuras cuasi-federales para realizar una gestión adecuada. Estas estructuras estuvieron presentes en el proceso de confederación que dio lugar a la formación del Imperio Alemán durante la segunda mitad del s. XIX, en la que se hizo célebre la frase que Hans Nawiasky escribió en 1928: “Bismarck was a federalist because he was a monarchist” (Forestier-Peyrat, 2017: 531). El Imperio Otomano, conformado por numerosas naciones con amplias diferencias étnicas y religiosas, también se vio obligado a adoptar una estructura administrativa descentralizada. Otros casos aún más remotos históricamente, y quizás difícilmente extrapolables al concepto actual de federalismo, se pueden encontrar en la división provincial del Imperio Romano o en la descentralización administrativa de los Imperios Han y Tang en China, donde “they assumed the power to appoint key regional officials and diffused authority among a greater number of officials” (Edwards, 2009: 1).

Más allá del interés histórico, los ejemplos mostrados presentan diferencias insalvables con los sistemas políticos actuales, de forma que su utilización dentro de la Ciencia Política ha tenido un carácter habitualmente descriptivo. A partir del siglo XX, el estudio del autoritarismo adquiere una mayor complejidad, principalmente debido a que algunos países del socialismo real aplicaron una descentralización administrativa considerable para abordar las diferencias étnicas, siendo Yugoslavia el ejemplo paradigmático de esta tendencia. La superación (parcial) del eurocentrismo académico y el acelerado desarrollo económico de un importante número de países autoritarios, han aumentado el interés de algunos investigadores en analizar los efectos del federalismo fiscal en estos países. Si a esto añadimos que una parte de estos estados son multi-étnicos debido a las fronteras artificiales construidas por las potencias coloniales europeas, terminaremos de comprender por qué el federalismo autoritario también se ha situado en el centro del mapa en la gestión de los conflictos étnicos. Conocer en qué se diferencia la gestión de estos en las democracias liberales y en los regímenes autoritarios constituye, en consecuencia, un objetivo fundamental para la ampliación de las fronteras del federalismo académico.

Esta investigación constará de cuatro bloques diferenciados. En el primero de ellos haremos un recorrido por las diferentes corrientes teóricas que, reflexionando

sobre la cuestión federal, han realizado aportaciones que son susceptibles de aplicarse en los países autoritarios. Dado el carácter controvertido de la posibilidad de combinar federalismo y autoritarismo, hemos tenido que reconceptualizar una parte de los términos y variables empleadas en el análisis académico, de forma que fueran válidos para nuestro estudio. La segunda parte consistirá en una explicación de la metodología empleada, justificando la adecuación de las técnicas empleadas a los objetivos de la investigación. También realizaremos la operacionalización de las variables dependiente e independientes, de forma que resulte claro el nexo causal que pretendemos comprobar y razonaremos los criterios empleados para la selección de los casos de estudio. En la tercera parte del artículo situaremos el análisis de los casos seleccionados, buscando comprender el efecto que nuestras variables explicativas tienen en el resultado esperado en la variable dependiente. Por último, en la cuarta sección recogeremos las conclusiones a las que hemos llegado durante la realización de esta investigación, señalando tanto las potencialidades y objetivos cumplidos, como los errores y límites que debemos tener en cuenta en futuras extensiones de la investigación.

3. Marco teórico

La literatura académica sobre el federalismo ha alcanzado una notable influencia y extensión, aparejada a la aplicación de políticas descentralizadoras en un número creciente de países. La escuela del federalismo fiscal tuvo como uno de sus iniciadores a Charles Tiebout y su obra "A Pure Theory of local Expenditures" (1956), conocida coloquialmente por el eslogan "votar con los pies", esto es, que ciudadanos y empresas decidieran el lugar de tributación en función de las facilidades ofrecidas por las instituciones políticas de cada territorio. Posteriormente, cobró una gran relevancia la propuesta del market-preserving federalism como receta ideal para que los países en vías de desarrollo crecieran, al mismo tiempo que la estructura institucional "restricts economic policymaking via limits on the discretion of the government" (Weingast, 1995: 3). Estas propuestas económicas dieron lugar a diferentes subtipos en el federalismo, como el cooperativo o el competitivo, en función del tipo de relaciones que mantenían las regiones entre sí y con el estado.

El eje del debate federal ha estado, sin embargo, en la capacidad de este planteamiento institucional para mitigar o eliminar los conflictos derivados de la diversidad étnica. En este punto, los efectos del federalismo han sido considerados tanto un éxito como un fracaso, dependiendo principalmente de la selección de casos realizada. En el primero de los casos, se defiende la capacidad del federalismo para acercar el gobierno a los ciudadanos, aumentar la participación de los grupos étnicos y permitir que tengan autonomía en determinadas esferas político-económicas y culturales (Stepan 1999, Horowitz 1991, Lijphart 1977). Por el contrario, otro sector de la doctrina defiende que la descentralización aumenta los recursos de los actores regionales para confrontar con el estado central, promulgar leyes discriminatorias, e incluso fortalecer o financiar a grupos armados (Hardgrave 1994, Kymlicka 1998, Snyder 2000). Recientemente ha cobrado importancia el estudio de las causas que generan un riesgo de secesión, así como la utilidad de mecanismos como el referéndum de autodeterminación para enfrentar de forma pacífica esta problemática (Sorens 2005).

El análisis se ha centrado, como ya hemos mencionado, en el federalismo en los sistemas democráticos. Uno de las primeras aproximaciones metodológicas respecto a la posibilidad de un “federalismo autoritario” la podemos extraer de William H. Riker y su célebre libro “Federalism: Origin, Operation, Significance”, publicado en 1964. Las ideas en él expuestas abrieron nuevas vías de investigación para los estudiosos de la temática federal, pese a que el propio autor no prestara una gran atención a esta subdisciplina en obras posteriores. Como precursor de la teoría de la elección racional, Riker decidió proponer un modelo de análisis basado en el “individualismo metodológico”, en el que los actores presentes en un proceso político tomaran sus decisiones atendiendo a los beneficios y costes que estas les reportaran. En el caso de los procesos de descentralización, los dos actores “contendientes” serían el gobierno central y las unidades sub-estatales, que defenderían posturas antagónicas en el conflicto. El federalismo constituiría “an outcome of institutional bargaining among politicians” (Filippov, 2005: 95), representando la existencia de un equilibrio de poder entre el gobierno central y el regional. Al depender el éxito federal de la negociación entre actores, y no de la existencia de unas instituciones democráticas concretas, la propuesta de Riker

cobra especial utilidad para el análisis del federalismo en países autoritarios. De esta forma, el uso de la violencia o el empleo de herramientas coercitivas quedan dentro del elenco de herramientas utilizadas por el poder central para reducir o eliminar las tendencias centrífugas. En el otro lado de la ecuación, Riker entendía que el equilibrio solo se podía mantener si las élites regionales disponían de incentivos para mantener su autonomía, destacando entre ellos la existencia de mecanismos de competencia electoral descentralizada. De la síntesis resultante del poder de cada una de las partes, el autor extrajo un modelo con cuatro posibles resultados. En sus vertientes extremas, el federalismo terminaría en fracaso; ya fuera por la preponderancia del estado central, como por la capacidad de las regiones para lograr la segregación del estado. Los modelos intermedios, con ligera ventaja para una de las partes, representaban el equilibrio inestable inherente a cualquier modelo federal.

En el estudio del origen de la negociación federal la teoría de Riker se muestra, por el contrario, menos flexible. Como el mismo autor reconoció, su libro fue escrito pensando en los orígenes del federalismo estadounidense, por lo que únicamente parece encajar adecuadamente con los modelos de federalismo coming-together. El detonante elegido por el autor para el inicio del proceso descentralizador, una amenaza militar externa, no encaja con una parte de los procesos existentes en la actualidad. Autores como Michael G. Breen han reinterpretado esta variable con el objetivo de adaptarla a los modelos de federalismo holding-together, presentes en un importante número de países surgidos tras los procesos de descolonización. El modelo de Riker resulta aplicable para estos casos cuando sustituimos la amenaza militar por un nivel moderado de “secession risk and once the infrastructural capacity of the periphery is taken account” (Breen, 2017: 2). La propuesta para la negociación federal quedaría en este caso lejos de los métodos habituales en las democracias federales; estableciendo que “the militarily stronger the political center is vis-a-vis the regions, the less likely is a federal structure” (Ziblatt, 2004: 75) y, al contrario, que un poder militar excesivo de las regiones determina la secesión y, con ello, el fin del modelo federal.

En las democracias liberales con modelos federales consolidados, las

decisiones son construidas a través de una negociación constante entre el gobierno central y las élites regionales, en las que “the incentives to preserve the political autonomy of the constituent governments follow from the logic of political competition, which means that political parties serve as the main intervening variable” (Filippov, 2005: 96). Siguiendo este hilo argumental, se ha planteado la posibilidad de que el éxito o el fracaso de los modelos federales se deba al grado de influencia de los partidos regionales que reciben competencias fruto del proceso descentralizador. Emerge aquí la polémica tesis de David Brancati, que sitúa a los partidos regionales como el elemento desestabilizador del federalismo, la causa última que provoca su fracaso ya que “increase ethnic conflict and secessionism by reinforcing regionally based ethnic identities, producing legislation that favors certain groups over others, and mobilizing groups to engage in ethnic conflict and secessionism or by supporting terrorist organizations that participate in these activities” (Brancati, 2006: 653).

Si el papel de los partidos regionales resulta tan negativo para el éxito del federalismo, ¿qué ocurre en aquellos países autoritarios que aplican políticas descentralizadoras? Dado que no existe un sistema de partidos competitivo, ¿deberíamos esperar la inexistencia de riesgos de secesión o de conflictos étnicos toda vez que no está presente ningún actor con la capacidad para iniciarlos? Cabría señalar, continuando con el modelo rikeriano, que la inexistencia de un sistema de partidos regional invalidaría la posibilidad federal, al tener el gobierno central todas las herramientas de poder a su alcance. Esta hipótesis concentra en exceso la atención en la importancia de los partidos como representantes de las élites regionales, obviando que “autocratic regimes allow a limited civil – and in a federal state also local and regional- pluralism” (Benz & Kropp, 2014: 4). Esta sociedad civil puede articularse de maneras muy diversas en el contexto de un país autoritario: movimientos sociales, sindicatos, grupos terroristas, organizaciones militares, etc. Cuando estos actores se erigen como representantes de algún grupo étnico, el federalismo puede cumplir un papel similar al del constitucionalismo en las transiciones que Juan Linz denominó como reformas pactadas.

David Brancati, al analizar los partidos regionales como variable central, no confronta este dilema, limitándose al afirmar que “decentralization is only genuine in

democracies” (2006: 652). Starodubtsev ofrece una justificación más rica, considerando que “a proper federal system is highly competitive, polycentric and unpredictable when dealing with the results of certain political bargaining” (2013: 2). Este carácter “imprevisible” de la negociación puede proceder, sin embargo, de otras fuentes de poder alejadas del sistema electoral de las democracias liberales. Los ejemplos, aunque heterogéneos, dan buena cuenta del potencial que tienen determinados actores para recoger los frutos de la descentralización político-económica. En Rusia, “ethno-regional elites which were already granted a degree of (formal) self-rule in the Soviet federation found themselves in a strong bargaining position vis-a-vis the center” (Obydenkova & Awenden, 2013: 89), sin importar en exceso que estos gobernadores mantuvieran una pertenencia formal al partido hegemónico, Rusia Unida. En China, “the new decentralization affords local governments considerable discretion over economic policy” (Weingast, 1995: 22), aún perteneciendo estos al Partido Comunista de China. En contextos de conflicto bélico, “armed groups can be credible negotiating partners” (Breen, 2016:7); es el caso de las conversaciones de paz entre el estado y la guerrilla del Partido Comunista de Nepal, o el mantenimiento de las reivindicaciones étnicas por parte de los Tigres de Liberación del Tamil Eelam, en Sri Lanka.

Por los motivos señalados, entenderemos que “federalism is not bound to liberal democracy but is a political form that has also been mobilized by authoritarian regimes, as forms of constitutionalism have too” (Forestier-Peyrat, 2017: 531). Con las herramientas conceptuales señaladas, seremos capaces de extender nuestro análisis a los actores relevantes de los modelos autoritarios, poniendo a prueba la hipótesis de que los partidos regionales constituyen la variable principal en cualquier proceso federal.

4. Metodología

Nuestra investigación consistirá en un estudio comparado de un número reducido de casos, con el objetivo de comprobar el efecto de algunas medidas de centralización política en los niveles de conflicto étnico. Dentro del análisis comparado podemos encontrar dos variantes metodológicas, denominadas método de la diferencia y método de la concordancia. La primera de ellas presenta

variabilidad en la variable dependiente, pero mantiene iguales todas las variables independientes salvo una, que constituiría nuestra variable causal. En el método de la concordancia, por su parte, la variable dependiente no cambia, y únicamente una de las variables se da en todos los casos estudiados: sería esta la causa del fenómeno que queremos explicar.

En nuestro estudio, hemos escogido el método de la diferencia para intentar explicar los motivos que provocan la emergencia de conflictos étnicos en unos países y no en otros. De esta forma evitamos una selección en función de la variable dependiente, ya que “no se puede conocer ninguna de las causas de ésta sin tener en cuenta otros ejemplos en los que adopte valores diferentes” (Keohane & King & Verba, 2000: 140). Nuestros casos presentarán una serie de fenómenos comunes, salvo en uno de ellos, que constituirá nuestra variable independiente y, por tanto, la causa del cambio en la variable dependiente.

Nuestra investigación recogerá como variable dependiente los niveles de conflicto étnico presentes en cada uno de los países seleccionados. Estimamos que uno de los principales objetivos de la descentralización administrativa en los países multiétnicos consiste en limitar los problemas de convivencia entre las diferentes comunidades que lo habitan. De esta forma, podemos medir el éxito o el fracaso de un modelo federal en su capacidad para lograr una convivencia pacífica entre sectores diversos de la sociedad en ámbitos como la cultura, la religión o el respeto al uso de la lengua propia. Dentro del análisis del conflicto étnico prestaremos especial atención a aquellas acciones que generan situaciones de violencia intercomunal o que, llevadas a un nivel extremo, implican una rebelión armada contra el gobierno. En el primer caso, la violencia intercomunal representa “a good measure of ethnic conflict, which encompasses all forms of violence among people of different ethnic groups broadly” (Brancati, 2006: 665). Por su parte, en el peligro de rebelión se recogerían “all conflicts between minority groups and states and between minority groups and dominant groups exercising state power” (Brancati, 2006: 665). Al poner en cuestión las instituciones políticas y la propia indivisibilidad del país, constituye inevitablemente un fracaso del modelo federal, ya que este es aceptado por el gobierno central únicamente bajo la premisa de *hold-together*.

La variable independiente que deberá establecer un nexo causal con los

niveles de conflicto étnico será la centralización política. Estudiaremos, para cada uno de los casos, cómo el poder del gobierno central sobre las regiones afecta a las dinámicas conflictuales existentes en el país. En principio, los sistemas autoritarios serán más tendentes a la existencia de un modelo de “federalismo centralizado”, pero las medidas de centralización están disponibles también para los países democráticos que decidan usarlas. La centralización política estará basada en las características del sistema de partidos existente en cada uno de los países, que se compondrá de los elementos expuestos a continuación:

- **Niveles bajos de fragmentación del sistema de partidos.** En los países democráticos o con autoritarismo competitivo, un número alto de partidos regionales puede coadyuvar a un aumento de los niveles de conflicto étnico. Principalmente, puede esperarse que dificulten la gobernabilidad al reducir la estabilidad y duración de los gobiernos. Además, es probable que se reduzcan las posibilidades de coaliciones interseccionales, dado que cada partido representara a un grupo étnico concreto. Por el contrario, unos niveles bajos de fragmentación parlamentaria permiten que unos pocos partidos estatales dominen la situación política, integren reivindicaciones amplias y controlen los efectos de la descentralización. Para medir esta variable, utilizaremos el Número Efectivo de Partidos Parlamentarios (NEPp), creado por Laakso y Taagapera.
- **Nivel de institucionalización de los partidos políticos.** Puede adoptar diferentes formas según el régimen político que estemos tratando. En general, entenderemos que un partido está fuertemente institucionalizado cuando disponga de redes organizativas por todo el territorio, sea capaz de establecer una jerarquía de mando con reglas claras, y tenga una cierta solvencia ideológica. Por último, el carácter multiétnico de un partido será valorado positivamente, toda vez que le permitirá establecer coaliciones interseccionales y evitar los efectos perniciosos del electoralismo basado en el enfrentamiento étnico. Por el contrario, “top-down party management, pervasive clientelism, and inadequate grassroots development” (Tomsa,

2014: 250), son elementos característicos de partidos políticos con una institucionalización débil. Ambos modelos de institucionalización tienen efectos contradictorios en la calidad de la gestión administrativa, así como en la capacidad de articular propuestas a largo plazo.

- **Herramientas de control del poder ejecutivo.** En esta categoría incluiremos diversos métodos de control de los que disponen los gobiernos federales para evitar las tendencias centrífugas de las regiones. La medida más importante es la destitución de las autoridades regionales, que puede mostrar diferentes formas en función del sistema político en que se aplique. Incluiría la destitución de gobernadores o jefes del ejecutivo, la disolución de un parlamento regional o la expulsión o encarcelamiento de cargos locales de un partido. Otras medidas pueden consistir en el establecimiento de agencias o representantes del gobierno en las regiones, cumpliendo funciones de vigilancia o de canalización de recursos económicos. En esencia, nos referiremos a todas aquellas medidas que implican un control político-económico por parte del estado, ya sean formales o informales, excluyendo de ellas el uso de la fuerza militar.

El resto de factores de los casos escogidos deben mantenerse estables, dado que este “design requires maximizing similarities across cases, and in general, the more similar the cases, the more effective the design” (Anderson, 2015: 6). De esta forma, la selección de casos se hará en función de una serie de factores que deben estar presentes en todos los países escogidos, de manera que podamos asegurar que el cambio en la variable independiente es la verdadera causa de la variabilidad de la variable dependiente.

- En primer lugar, los casos observados deben ser países federales o con un sistema descentralizado de competencias. Para medir los niveles de descentralización emplearemos el *Regional Authority Index* (RAI) con datos para el año 2010. Este índice nos permite, en primer lugar, conocer el grado de competencias asumidas por las unidades subestatales (*self-rule*). En

segundo lugar, también recoge qué instituciones comunes son creadas para poner en común las políticas federales. El *shared-rule* comprende, por tanto, la armonización estatal de las diferentes regiones, considerado un rasgo básico para el éxito de la descentralización. La suma de estos dos elementos constituye la calificación final de cuán descentralizado está un país. En nuestro caso, exigiremos una cifra igual o superior a veinte, teniendo en cuenta que los países más descentralizados, como Estados Unidos o Bélgica, se encuentran en torno a los treinta puntos.

- En segundo lugar, estos países deben mostrar un cierto grado de diversidad étnica. Si recogiéramos tanto países homogéneos como heterogéneos estaríamos alterando el resultado, dado que los países con diversidad étnica tienen tendencia a generar mayores problemas de gestión que aquellos que tienen una cultura común en todo el territorio. Por otro lado, siendo uno de los elementos de nuestra variable dependiente la “violencia intercomunal”, resultaría imposible medir su valor en países en que no están presentes comunidades con diferencias reseñables. Para medir los niveles de diversidad étnica, utilizaremos el *World Directory of Minorities*, que muestra las diferencias étnicas y religiosas que caracterizan a la población de cada país, así como el porcentaje que representan sobre el total de la población.
- En tercer lugar, la selección realizada no puede incluir aquellos países que ostentan la denominación de “libre”, según los indicadores de *Freedom House*. La razón principal estriba en que estos países han tenido un desarrollo histórico más temprano, dotándose de un sistema institucional consolidado. De esta forma, la resolución de conflictos étnicos en estos países ha dispuesto de una serie de mecanismos amortiguadores, favoreciendo las posibilidades de una negociación pacífica. Esto al margen, la propia concepción de “diversidad étnica” difiere bastante entre las democracias occidentales y los sistemas que surgieron fruto de la descolonización. En las primeras no suelen estar presentes diferencias religiosas significativas, y es habitual que haya existido una historia común

durante, al menos, dos siglos. Por el contrario, los países asiáticos y africanos surgidos de los procesos de independencia tuvieron que resolver una enorme cantidad de problemas fruto de las arbitrarias fronteras establecidas por las potencias coloniales.

En función de los criterios de descentralización y diversidad, los países seleccionados serán Indonesia, que tiene un nivel de descentralización de 20'8 y una diversidad étnica de 0'74; Malasia, cuyos niveles de descentralización puntúan con un 21'5 y los de diversidad étnica con 0'59; Rusia, con 20'1 en los niveles de descentralización y 0'24 en los de diversidad y Nigeria que tiene una diversidad étnica de 0'85.

5. Análisis de Casos

5.1 Indonesia

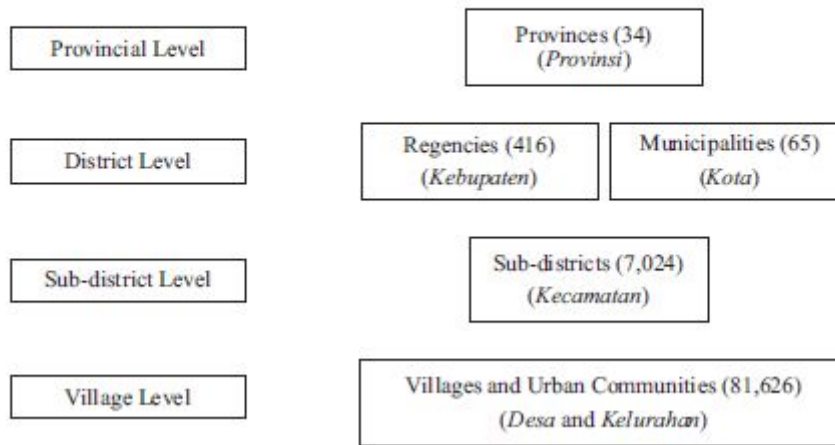
Las políticas federales en Indonesia han tenido una corta trayectoria, pese a que las características sociales y geográficas del archipiélago configuraban un contexto idóneo para la descentralización administrativa. Más de 17000 islas, con 5000 kilómetros en sus extremos más distantes, en las que habitan una miríada de grupos étnicos con importantes particularidades culturales. Entre ellos, predomina la etnia procedente de la isla de Java, con un 40 % del total de la población, seguidos de los sundaneses (15 %) y los malayos (12 %). En el plano religioso, el islam es la religión mayoritaria en el archipiélago (87 %), seguido del protestantismo heredero de la penetración colonial holandesa (6 %), y del catolicismo (3 '5 %).

Lograda la independencia de Holanda en el año 1949, Indonesia se había establecido como un estado no alineado en la esfera internacional y, por ello, fue sometida a fuertes presiones por los dos bloques de la Guerra Fría. El gobierno del presidente Sukarno se había apoyado progresivamente en el poderoso Partido Comunista de Indonesia, lo que había suscitado el antagonismo de importantes facciones en el seno del ejército y la oligarquía. En 1966, las crecientes tensiones desembocaron en un golpe de estado

dirigido por el general Suharto, que terminaron con el desplazamiento de Sukarno del poder y el exterminio de entre quinientos mil y un millón de miembros del partido comunista (Roosa 2006). El régimen que surgió adoptó la denominación de Nuevo Orden, estableció a Suharto como presidente y configuró un régimen autoritario con una política marcadamente centralista. En términos legislativos, se aplicó una desconcentración administrativa que estableció “a direct line of command and accountability from Jakarta down to the village level” (Ostwald et al., 2016: 141). Este sistema fue capaz de implementar políticas públicas de sanidad o educación a través de decretos presidenciales, que alcanzaban la mayoría de aldeas y ciudades gracias a la acción de control de los ministros gubernamentales. El papel de Java como centro de decisión política “created profound social and political exclusions, bred distrust of the state, and often relied on overt violence” (Varshney & Panggabean & Zulfan, 2004:19), ya que exigía la extracción de recursos de las zonas más ricas del país y provocaba agravios comparativos con el resto de etnias. A consecuencia de ella, estallaron una serie de conflictos étnicos de diferente intensidad y duración, como la matanza de población china en West Kalimantan, o las rebeliones secesionistas en Aceh y Papúa Occidental.

En 1998, el vicepresidente Habibie comenzó un proceso de transición tras “a devastating economic crisis that spurred massive anti regime protests and eventually Suharto’s resignation” (Smith, 2008: 211). El proceso fue dirigido por las élites político-económicas del régimen, que decidieron acabar con la estructura unitaria del estado y configurar un sistema electoral democrático. A través de la Ley 22/1999 se estableció que “public goods such as education, healthcare, and infrastructure were to become the purview of local governments, though the central ministries retained a role in implementation and regulation of provisions” (Ostwald et al., 2016: 142). La misma norma introducía la celebración de elecciones en los niveles provincial y de distrito, así como el establecimiento de elecciones directas para gobernadores, alcaldes y jefes de distrito.

FIGURE 1
Indonesia's Administrative Levels



Fuente: Ostwald et al. (2016), "Indonesia's Decentralization Experiment"

Fragmentación extrema y mercado electoral

La diversidad étnica y su posible derivación en un nivel extremo de fragmentación del arco parlamentario fue una de las principales preocupaciones del gobierno en el diseño del sistema electoral. La Ley 2/1999 estableció que, para presentarse a las elecciones legislativas, los partidos debían tener presencia en un tercio de las treinta y tres provincias que conforman el país. De esta forma se buscaba conservar la influencia hegemónica de los dos partidos estatales permitidos en el régimen del Nuevo Orden: Golkar y el Partido Democrático de Indonesia (PDI), dado que eran los únicos que mantenían redes organizativas por todo el territorio. La primera consecuencia de esta medida era la eliminación de facto de los partidos provinciales, en la creencia de que sería más difícil para "300 mayors and regents to act collectively than for 28 governors" (Smith, 2008: 222). Por el contrario, se favorecía la emergencia de un sistema bípedo de grandes partidos estatales y pequeños partidos y candidatos que se presentaban a las elecciones locales. Dado que los frutos de la descentralización administrativa eran recogidos por el nivel local (distritos y regencias), los gobiernos sub-estatales quedaban desprovistos de la importancia que suelen ostentar en los niveles federales.

Los efectos pudieron comprobarse en las primeras elecciones celebradas, en 1999. De los 140 partidos que intentaron presentarse, "únicamente" 48 lograron

su objetivo, dando como resultado un NEPp de 5'4. En un contexto en el que se mantenía la guerra en la región de Aceh, y emergían nuevos conflictos como el que enfrentó a musulmanes y protestantes en la ciudad de Poso (Aragon 2011), el gobierno decidió establecer nuevos requisitos para la participación electoral. Los partidos que decidieran presentarse a las elecciones legislativas debían tener diez diputados en la cámara, o más del tres por ciento de los votos en más de la mitad de las provincias. Pese a que “no more than 24 parties were allowed to participate because of additional legal restrictions” (Ufen, 2006: 11), el NEPp aumentó hasta 7'1, principalmente debido a la caída electoral del anteriormente mayoritario Partido Democrático Indonesio-Lucha (PDI-P). En 2009, el descenso electoral de los partidos islamistas y el establecimiento de una nueva barrera electoral del 3'5%, tuvo como consecuencia una nueva reducción en la fragmentación hasta la cifra de 6'2. En las elecciones legislativas de 2014, las últimas hasta la fecha, el número de partidos volvió a aumentar hasta 8'1. En el nivel provincial, por su parte, la fragmentación ha sido sistemáticamente más alta, alcanzando el nivel de 7'95 partidos en 2009. Recordemos que, a nivel competencial, este nivel goza de una importancia relativamente escasa, pero se relaciona de manera relativa con los datos existentes para el nivel de distrito.

Aunque la fragmentación del sistema de partidos puede darnos una idea de los clivajes étnicos existentes en una sociedad, no basta por sí misma para explicar o justificar eventos de la gravedad que pretendemos analizar aquí. En este sentido, debemos mostrar la importancia que tienen los niveles de institucionalización de las formaciones políticas más relevantes. El sistema de partidos indonesio ha caminado hacia “the rise of presidential or presidentialised parties, growing intra-party authoritarianism, the prevalence of ‘money politics’, the lack of meaningful political platforms, weak loyalties towards parties, cartels with shifting coalitions and the upsurge of new local elites” (Ufen, 2006: 3).

El carácter personalista de los partidos indonesios se ha visto favorecido, al margen de otros factores, por la implementación de sistemas de elección directa, tanto en las elecciones locales (*pilkada*), como en las presidenciales. Esto ha dado lugar a una eclosión de candidaturas individuales, que no necesitan el apoyo de un partido fuerte, sino la financiación de empresas locales para establecer redes

clientelares en el territorio en que se presentan. Estas estructuras electorales se han mostrado extremadamente volátiles, favoreciendo “splits, defections, and ill-discipline among party members at the local level” (Tomsa, 2014: 264). Esto al margen, el nivel nacional ha visto cómo los partidos estatales seguían el camino de sus homólogos occidentales, constituyéndose como catch-all parties con Golkar y PDI-P como sus máximos exponentes. En contextos como el indonesio, la estabilidad del sistema parlamentario puede depender “on the presence of cohesive and ideological organizations creating a setting for patterned electoral contests” (Tomsa, 2014: 264). La ausencia de estos elementos ha dado lugar a unos partidos ligeros, incapaces de fidelizar a los sectores de la población que representan.

Resultados y perspectivas

El caso indonesio nos muestra algunos resultados relativamente contradictorios. La mayoría de los mecanismos de centralización política que dirigen nuestra investigación no están presentes, o bien lo están de una forma muy leve. De este modo, conviven una alta fragmentación parlamentaria tanto a nivel estatal como local, una institucionalización débil de los partidos políticos, y la inexistencia de mecanismos de cese de los cargos locales desde Jakarta. Una visión contrapuesta podría resaltar la inexistencia de partidos en el nivel provincial y, quizás, el carácter no étnico de los partidos nacionales, una herencia del régimen centralista de Suharto.

De cualquier modo, los resultados a nivel de conflicto étnico parecen mostrarnos la escasa incidencia de estos factores en la violencia intercomunal y el riesgo de secesión. La amenaza secesionista de Aceh quedó suprimida debido a la catástrofe natural del tsunami en 2004, que afectó especialmente a esta provincia, obligando al gobierno y a los rebeldes a alcanzar un acuerdo. Los incidentes violentos han quedado reducidos a la mínima expresión, reflejando que “support for decentralization among the general population has been consistently strong” (Mietzner, 2014: 116). En este sentido, parece que ha jugado un papel clave la relativa superación del marco del *aliran*, en el que el contexto político estaba primordialmente marcado por el clivaje religioso. Esto ha provocado que las formaciones políticas, como ya señalamos anteriormente, hayan quedado

desprovistas de prácticamente cualquier rasgo ideológico que las diferencie. El efecto es ambivalente, ya que estos partidos, si bien no participan del aumento de la tensión étnica, tampoco son capaces de dotar de una mayor estabilidad al sistema.

Evidentemente, otros problemas han emergido con la descentralización. Algunos autores han señalado que la introducción del federalismo en Indonesia ha “facilitated the emergence of local ‘predatory power’” [que] exposes local community, their nature and culture, to resource grabs, environmental degradation, and eviction in the name of development and investments” (Paju Dale, 2015: 32). Para otros, los equilibrios generados son inestables, y aún no sabemos los efectos a medio plazo de las políticas federales, o que pasaría si se expusiera al país a una coyuntura internacional más agresiva. Estos problemas son, sin embargo, comunes a cualquier democracia liberal, y parecen representar, por el momento, una superación de las viejas dinámicas de conflicto.

5.2 Malasia

Al igual que una gran parte de las federaciones existentes en la actualidad, Malasia formó parte del imperio colonial británico hasta el año 1957. Durante esta etapa, los británicos mantuvieron la estructura descentralizada ya presente antes de su llegada, en la que las once entidades subestatales eran dirigidas por sultanes con una considerable autonomía. Una vez lograda la independencia, se intentó conformar un estado que recogiera tanto el área peninsular tradicional como otros tres territorios que habían estado bajo dominio del Reino Unido: Singapur, Sarawak y Sabah. Mientras el primero era un pequeño y rico enclave comercial mayoritariamente poblado por población china, las otras dos regiones eran pobres, estaban situadas en la separada isla de Borneo, y tenían una composición étnica muy diferente a la de la península. Con el objetivo de acomodar estas tres regiones en la estructura malaya, se decidió otorgarles una autonomía especial, sin que esto evitara la expulsión de Singapur en 1965, apenas dos años después de su ingreso. Las regiones de la isla de Borneo habían sido atraídas a la federación por, entre otros factores, los beneficios económicos de compartir estado con la pujante Singapur; su expulsión provocó una “increasing political frustration and a sense of political grievance within the two states of Eastern Malay (Means, 1968: 290).



Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Malaysia-Malaysia-is-a-federation-separated-into-two-regions-by-the-South-China_fig4_267872354

En términos étnicos, los malayos constituyen el mayor grupo humano, con un 57 % de la población, a lo que debemos añadir que “the Muslim religion has been closely identified with ethnicity. Virtually all Malays are Muslims” (Singh, 2001: 53). Un 25 % de la población está compuesta por población de origen chino, con una posición económica históricamente superior a la de los malayos y un acervo religioso especialmente reacio a la conversión al islam. De hecho, la minoría china reparte sus preferencias espirituales entre el budismo (17%), la religión tradicional china (11%) y el cristianismo (6%). El siguiente grupo está compuesto por grupos malayos diferentes a la etnia mayoritaria (10 %), principalmente aquellos que habitan en la isla de Borneo. Por último, el 7 % de indios representa la última minoría relevante en la federación, perfectamente sincronizada en el apartado religioso con el número de fieles que tiene el hinduismo (7 %).

Formalmente, Malasia se constituye como una federación conformada por trece estados autónomos. Sin embargo, las competencias de los estados subestatales se reducen “to areas such as lands and mines, Muslim affairs and customs, native laws and customs, agriculture and forestry, local government and public services, burial grounds, and the licensing of cinemas and theatres” (Loh,

2010: 132), mientras que la federación recoge competencias de mayor enjundia. La escasa relevancia de los estados en la gestión de áreas esenciales de la economía, junto a otros factores que veremos a continuación, han llevado a algunos autores a definir al país asiático como un modelo de federalismo centralizado o coercitivo, llegándose a negar incluso su condición de estado federal.

La decadencia del sistema de partido dominante

Hasta las elecciones legislativas de 2008, hablar del sistema de partidos malayo implicaba centrarse, casi en exclusiva, en el papel de la *United Malaysian National Organization* (UMNO), y de su agrupación electoral, *Barisan Nasional*. Esta coalición, que incluye partidos representantes de las minorías étnicas china e hindú, controló el gobierno federal durante más de cinco décadas, pese a que algunos estados sí habían sido ganados anteriormente por la oposición. Como hemos señalado anteriormente, las escasas competencias de los estados implicaban que, en puridad, el dominio de UMNO no se viera afectado. Si a esto añadimos las características centrípetas del sistema institucional malayo, podremos justificar su denominación como un sistema de *one dominant party*, en la categoría propuesta por Sartori.

En los últimos años diferentes eventos han allanado el camino hacia un sistema bipartidista, desmontando, elección tras elección, la dominación monocolor de UMNO. Los datos proporcionados por el cálculo del Número Efectivo de Partidos Parlamentarios nos permiten seguir esta evolución. En las elecciones de 2004, las últimas con una mayoría aplastante de UMNO, el NEPp era de 1'18, reflejando la existencia de un partido mayoritario y dos pequeños grupos de oposición con porcentajes de voto en torno al 5%. En 2008, un puñado de partidos opositores logran conformar una coalición, el *Pakatan Rakyat* (PR), obteniendo un 36'9 % de los votos y, en consecuencia, aumentando el NEPp hasta estándares cercanos a los de un sistema bipartidista (1'89). A esto debemos añadir la victoria que obtuvo el PR en las elecciones estatales de ese año, logrando el control de cinco estados y generando un punto de inflexión en las relaciones centro-periferia. La tendencia ascendente de la oposición se mantiene en 2013 al obtener la mayoría en el voto popular, aunque no logra superar a UMNO en el número de parlamentarios; el NEPp

se sitúa en 1'92. Las elecciones de 2018 fueron un terremoto político, ya que la oposición agrupada en la nueva coalición *Pakatan Harapan* consiguió la mayoría de los escaños y desalojó por primera vez a UMNO del poder. En ese momento se produce la consolidación de un sistema bipartidista, con un NEPp de 2'08, en el que además existe un tercer partido con un porcentaje relativamente importante de votos (8'11).

Habiendo constatado la marcada tendencia unipartidista en las seis décadas de recorrido electoral de la Malasia independiente, no debe extrañar la capacidad de UMNO para tejer una amplia red organizativa por todo el territorio de la federación. De hecho, podemos afirmar que las relaciones centro-periferia han estado marcadas en gran medida por el rol jugado por este partido. La preeminencia que las instituciones dan a la entidad federal, así como los escasos competidores electorales, han permitido que UMNO vacíe de contenido la estructura formalmente descentralizada, convirtiendo Malasia en “one of the region’s – if not the world’s – most centralized countries in practice” (Ostwald, 2017: 3).

El repertorio de acciones centrípetas llevadas a cabo por UMNO es extenso, y da buena cuenta del nivel de centralización política al que ha llegado la federación. En 1965 se produjo la suspensión de las elecciones locales, con el fin de que “their appointed councillors dominate the municipalities, town councils and district councils” (Loh, 2010: 133). En aquellas ocasiones en que la oposición ha logrado la victoria en algún estado, el gobierno federal ha respondido estableciendo agencias federales para controlar y dirigir los recursos destinados a estos estados, a través de “reliable top-down channels of influence [que] effectively reduced the autonomy of subnational governments” (Ostwald, 2017: 8). Entre estas agencias, destaca sobremanera la Oficina del Primer Ministro, que ha engrosado su presupuesto de forma constante, hasta ser “ten times larger than the state budget of economically powerful Selangor and fifteen times larger than Penang’s in the 2012 budget” (Yeoh 2011).

Otra prerrogativa del gobierno federal que muestra de forma aún más clara su dominio es la posibilidad de despojar de su cargo a los primeros ministros de aquellos estados que retan a la entidad central, como ocurrió en 1990 cuando “several opposition leaders calling for greater autonomy for Sabah were detained

without trial on the grounds of fostering secession” (Loh, 2010: 133). Por último, ya fuera del marco legal, UMNO ha ejercido numerosas actuaciones que, de forma informal, han socavado el poder de los estados dominados por la oposición. Sin ánimo exhaustivo, debemos destacar la cancelación de acuerdos económicos, la celebración de reuniones en las que no se invitan a líderes estatales pertenecientes a la oposición y la aplicación de medidas económicas directamente perjudiciales para los intereses de los estados. De esta forma, se persigue el objetivo de castigar a los votantes “díscolos”, demostrando que votar a la oposición implica un coste en el nivel de vida.

Resultados en el conflicto étnico

Los mayores casos de violencia intercomunal en Malasia han tenido como partes contendientes a la comunidad china y a la mayoría malaya. La primera siempre dispuso de un mayor poder adquisitivo, controlando importantes activos económicos del país, mientras que la mayoría malaya sufría los mayores índices de pobreza. En este contexto se pueden comprender los graves disturbios del año 1969, en los que cientos de personas de etnia china fueron asesinadas en una explosión de violencia que, aunque espontánea, había sido debidamente pavimentada por los representantes de ambas minorías en una serie de agravios mutuos. Este episodio tuvo dos consecuencias inmediatas. El gobierno decidió calmar el temor de los habitantes malayos, que consideraban que la población china, a través de su poder económico, terminaría alcanzando el control político del país. Para evitar esto, se dio paso a la Nueva Política Económica (NEP), que institucionalizaba la discriminación de la población china en el acceso a los puestos de la administración pública, así como establecía medidas de reducción de la pobreza entre los malayos. La otra repercusión tras la matanza de 1969 fue aún más dramática. El Partido Comunista de Malasia, que ya había emprendido acciones de guerrilla contra los ingleses y el estado malayo tras el final de la II Guerra Mundial, decidió retomar las armas. En esta decisión subyace el factor internacional de las tensas relaciones entre China y Malasia y, más importante, el hecho de que su militancia estuviera constituida mayoritariamente por ciudadanos chinos. El conflicto duró hasta el año 1989 y, si bien no llegó a poner en jaque al

gobierno malayo, sí dejó decenas de miles de muertos y una grieta mayor entre ambas etnias. Por último, en 1998 se produjo un enfrentamiento entre hindúes y malayos al respecto de la “relocation of a religious site in the state of Penang [que] seemed to suggest that ethnic conflict remains a serious and recurring phenomenon in Malaysian politics” (Singh, 2001: 41).

La considerable reducción de los niveles de conflicto étnico en Malasia tendrían, como primera explicación, los altos niveles de centralización política de la federación. Las numerosas medidas autoritarias aplicadas, entre las que destacan la detención de líderes y el control de los recursos económicos, pueden haber limitado las posibilidades de intentos secesionistas por parte de las débiles élites regionales. Ello no implica, sin embargo, que estos conflictos no pudieran haberse derivado a través de otros actores, emergiendo como erupciones espontáneos de violencia intercomunal. En este sentido, parece justo reconocer que el carácter interétnico de la coalición dominante *Barisan Nasional* ha jugado un papel esencial como aglutinador de las etnias china e hindú. Desgraciadamente, el ascenso de la plataforma multiétnica *Pakatan Harapan* en los últimos años ha implicado una merma en el desempeño de los partidos chino e hindú que participan en *Barisan Nasional*. Como consecuencia de ello, esta formación ha perdido incentivos para mantener el equilibrio étnico, retornando a una “malayización” que, desde 2016, está contribuyendo a la aparición de células yihadistas y a la introducción del Estado Islámico en la región.

5.3 Rusia

La desmembración de la URSS en 1991 dio lugar a dieciséis repúblicas independientes, constituyéndose la Federación Rusa como la heredera legal de la extinta potencia socialista. Desde el comienzo de la presidencia de Boris Yeltsin, una de las preocupaciones esenciales estribaba en el mantenimiento de la integridad territorial del nuevo estado, ya que en el interior de las renovadas fronteras aún se mantenían regiones con voluntad separatista, como Chechenia o el Tatarstán. Las tensiones entre los órganos ejecutivo y legislativo, que derivaron en el autogolpe presidencial contra el parlamento en 1993, contribuyeron a aumentar la inestabilidad política. Para imponerse a sus adversarios, Yeltsin tuvo que ofrecer

fuerzas concesiones a las regiones a través de acuerdos bilaterales, contribuyendo a fortalecer la posición de los gobernadores a cambio de que estos garantizaran el respeto a la integridad territorial de la federación. De este modo, las instituciones formalmente federales perdían peso frente a una negociación bilateral centro-periferia que dependía, evidentemente, de la fuerza de cada una de las partes. Estando el gobierno federal en una posición débil, le fue posible al secesionismo checheno, de mayoría musulmana, resistir la intervención militar e incluso extender las operaciones hasta el Daguestán. Muy desgastado, Yeltsin preparó a su sucesor, el aún desconocido director del Servicio Federal de Seguridad, Vladimir Putin.

En algunos sectores se ha considerado, desde un prisma excesivamente personalista, que la llegada de Putin a la presidencia de Rusia supuso un giro radical en el rumbo político de la federación, poniendo fin a una decadencia provocada por la errática e inestable personalidad de Yeltsin y, complementariamente, acabando con la evolución democrática de la que disfrutaba el país. En realidad, como han señalado otros autores (Morales 2012), Putin no hizo más que continuar el plan de su antecesor, con la diferencia de que las circunstancias exteriores (aumento del precio del petróleo y mayor asertividad internacional), favorecieron los planes del nuevo presidente. A partir del año 2000, el superior desempeño económico del país favorece una mayor estabilidad política, que Putin aprovecha para derrotar definitivamente a la guerrilla chechena y, adicionalmente, ajustar cuentas con las élites regionales que habían florecido en la década de los noventa.

Aunque haya perdido la consideración de superpotencia tras los acontecimientos relatados, Rusia continúa siendo el estado más extenso del mundo; su territorio conecta Europa Oriental con el Océano Pacífico, recogiendo en su seno una gran variedad étnica, económica y geográfica. Mantiene una población de 146 millones de habitantes, en la que los rusos constituyen la etnia mayoritaria (86 %), pese a que hay otras comunidades como los tártaros (3'2%), estas "comprises a majority in just ten of the thirty two ethnic-based components, and a plurality in one (Tatarstan)" (Ross, 2000: 408). En el plano religioso, destaca la minoría islámica (10%), tan solo superada por el cristianismo ortodoxo (16 %) y un número

sorprendentemente elevado de no creyentes (72 %). En el plano administrativo la federación está compuesta tanto de regiones étnicas con considerables competencias (repúblicas, áreas y regiones autónomas), como por territorios sin ninguna ligazón cultural que ostentan competencias reducidas, conformando una federación asimétrica.

La consolidación del autoritarismo competitivo

El sistema de partidos ruso está compuesto, en la actualidad, de cuatro formaciones con representación parlamentaria: Rusia Unida (vehículo electoral de Putin), el Partido Comunista de la Federación Rusa (PCFR), Rusia Justa y el Partido Liberal-Democrático. La mayoría de académicos se dividen entre la categorización de Rusia como un modelo de autoritarismo competitivo y la afirmación de que, tras la salida de Yeltsin del poder, el país eslavo se ha convertido en un modelo autoritario puro. Más allá de estas consideraciones, el aspecto fundamental reside en que, a partir del año 2001, el ejecutivo dirigió una política destinada a estabilizar el sistema de partidos mediante dos mecanismos: la reducción de la oferta partidaria y la institucionalización de Rusia Unida como partido dominante.

Con respecto a la primera batería de medidas, se establecieron numerosas limitaciones para el registro legal de partidos políticos; entre otras, se prohibía la creación de estos sobre una base profesional, racial, nacional o religiosa, y se establecía una membresía mínima (diez mil) repartida, al menos, en la mitad de las regiones de Rusia a razón de cien por cada una (en 2004 se aumentaría hasta cien mil miembros y un mínimo de quinientos por región). Con el añadido de un sistema electoral puramente proporcional, la posibilidad de establecer partidos regionales quedaba anulada, factual y formalmente. En adición, el umbral electoral fue elevado del 5 al 7% en 2003, limitando aún más la entrada en el parlamento de los grupos de la “oposición liberal”. En el plano de la creación de un sistema de partido dominante, Putin ha logrado favorecer el establecimiento de Rusia Unida como organización hegemónica en todos los niveles políticos existentes en la Federación (local, regional y estatal), obteniendo crecientes ventajas electorales contra el que era su mayor competidor, el PCFR. Además, se ha convertido en un auténtico gigante organizativo con “a mass membership of over 1.5 million and nearly 60,000

regional, local and primary branches” (Reuter, 2010: 295).

La fragmentación del arco parlamentario ruso ha ido decreciendo desde las primeras elecciones plenamente democráticas, en 1993, en la que se registró un NEPp muy elevado, de más de quince partidos efectivos. En las posteriores elecciones de 1995 la fragmentación descendía hasta los 6'17 partidos, aunque en 1999 el descenso del PCFR volvía a elevar esa cifra hasta los ocho partidos. En 2003, en las primeras elecciones en que se presentaba Rusia Unida, la fragmentación desciende hasta la manejable cifra de 3'65 partidos. En 2007, el NEPp ya se corresponde al de un sistema puramente bipartidista (1'91), con una Rusia Unida ampliamente despegada de sus tres rivales. En 2011, el aumento electoral del PCFR hasta el 19 % de los votos y el mejor desempeño del PLDM y Rusia Justa dieron lugar a un ligero aumento hasta 2'91. Esta tendencia no se consolidó, y las elecciones parlamentarias de 2016 han sido las menos fragmentadas de la historia, con un NEPp de 1'3 que parece dejar poco espacio a la articulación de la oposición en un parlamento, por lo demás, carente de grandes capacidades legislativas y ejecutivas.

En el plano regional, las élites están representadas por los gobernadores, que tienen su origen en aquellos actores políticos y económicos que fueron “the first to be given access to the rich pickings of the regional privatization troughs” (Ross, 2000: 405) acaecidos durante la transición político-económica. Con el objetivo de lograr una mayor autonomía económica y política para su territorio, comenzaron a armar vehículos electorales que obtuvieron desempeños notables en su objetivo de extraer concesiones al centro. En 2001, de hecho, “el 70% de la legislación regional era ajena a la federal, mientras que el 34% la contradecía abiertamente” (Morales, 2012: 44). Esto dio lugar a una considerable paradoja: dadas las nulas veleidades democráticas de los gobernadores, se configuró una descentralización autoritaria, “with the federal centre serving as a weak national superstructure built upon a variety of subnational authoritarian regimes” (Golosov, 2011: 626).

Aprovechando la ola de popularidad que le brindaba la victoria militar contra la guerrilla chechena, el presidente decidió acometer una serie de modificaciones en las relaciones centro-periferia. En apariencia, se trataba de recuperar parte del poder que el gobierno central había ido concediendo a través de acuerdos

bilaterales en la fallida década de los noventa. Con este objetivo, en 2004 se eliminaba la elección directa de los ejecutivos regionales, de forma que estos pasaban a ser elegidos directamente a través del poder ejecutivo. En realidad, esta medida escondía un pacto entre los gobernadores y el presidente: los primeros debían afiliarse a Rusia Unida y garantizar unos determinados resultados electorales para la marca, mientras que el ejecutivo se comprometía a mantener la autonomía política de la que estos gozaban. El 80% de los gobernadores se mantuvieron en el cargo y, de forma poco casual, el mismo porcentaje de ellos estaba afiliado a Rusia Unida en 2012; aquellos que controlaban “autonomous resources delayed joining the party for longer than those without such resources” (Reuter, 2010: 294). Aunque las elecciones para el ejecutivo regional fueron recuperadas en 2012, los gobernadores aún tienen que superar “municipal and presidential filters, resulting in strict built-in selection bias” (Busigyna, 2018: 66), todo ello sin contar con que el presidente mantiene la prerrogativa de destituir gobernadores y disolver parlamentos en caso de una violación severa de la ley.

Resultados de la política de centralización

Tras la victoria del gobierno ruso sobre los rebeldes chechenos, no se ha producido ningún conflicto étnico relevante en la federación. Aunque pueda parecer que las políticas de centralización han sido las responsables de este resultado, en realidad otros factores parecen haber sido más determinantes. En primer lugar, los niveles de diversidad étnica no son elevados, aunque en el plano religioso exista una importante minoría musulmana. La federación rusa no heredó el carácter multiétnico de la Unión Soviética, toda vez que las repúblicas con mayor diversidad cultural habían proclamado su independencia en 1991. Dada esta homogeneidad étnica, no le ha sido complicado al gobierno reconstruir una identidad nacional rusa que enlace la república de Novgorod, el Imperio de Catalina la Grande o la Unión Soviética de Lenin. En segundo lugar, la ausencia de conflictos étnicos en la actualidad puede derivar de la inadecuada consideración de la guerrilla chechena como un actor surgido a raíz de una radicalización étnica. A diferencia de otras repúblicas segregadas en 1991, como Ucrania o Uzbekistán, Chechenia tenía una entidad administrativa menor, y era vista, más que como una reivindicación

nacional, como “un ejemplo exacerbado del profundo caos al que había llegado Rusia a causa de la mala gestión de sus dirigentes” (Morales, 2012: 207). Al contexto de fuerte inestabilidad político-económica, debemos añadir una considerable presión internacional por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, que buscaban evitar una intervención decidida del gobierno.

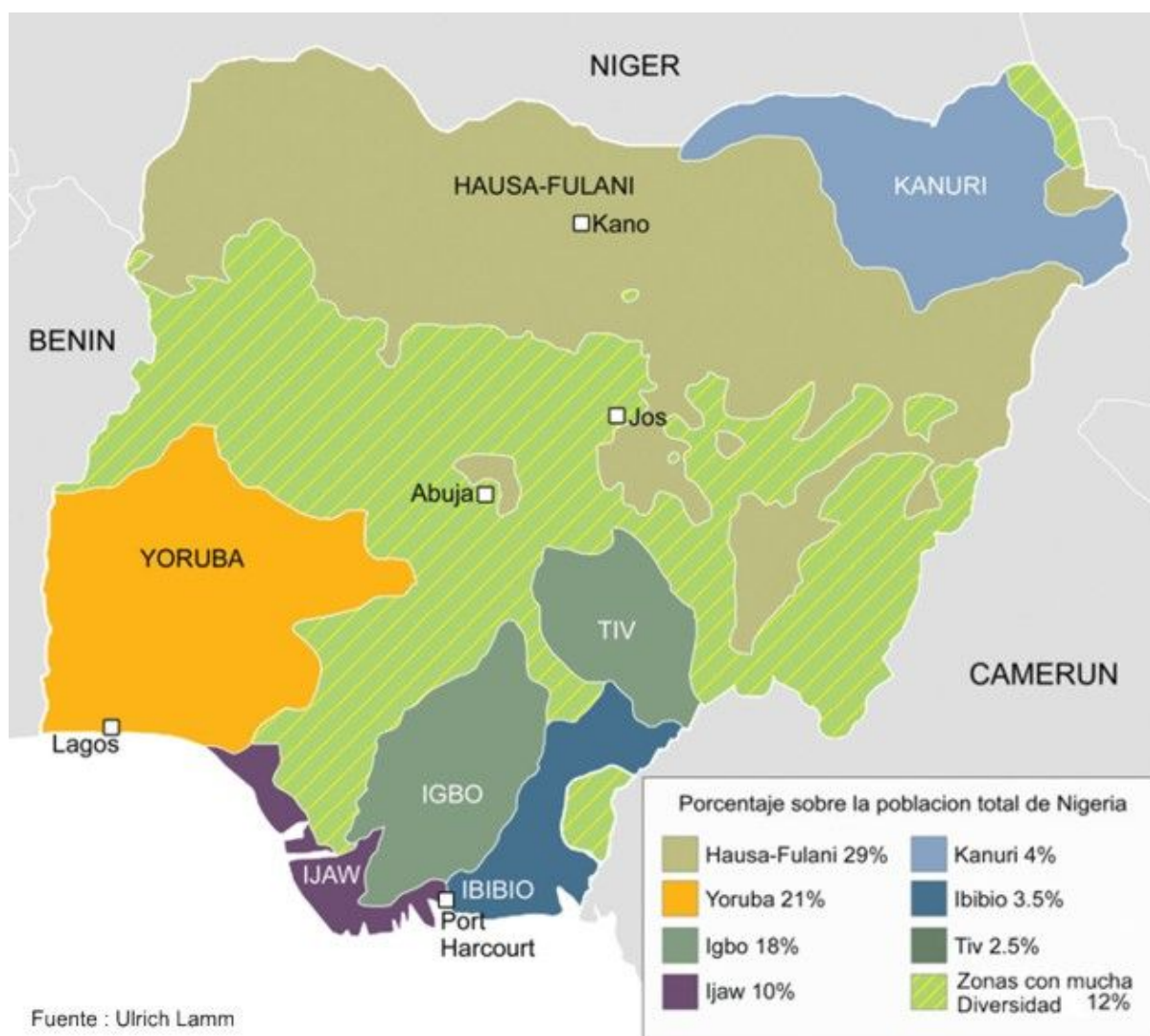
Por estos motivos, las medidas institucionales aplicadas en Rusia no han estado especialmente dirigidas a la resolución o mitigación de los conflictos étnicos, sino al arrinconamiento de la oposición de corte liberal y a la cooptación de las élites regionales. En consecuencia, el ejecutivo ha primado la consecución de la estabilidad política a través de la supresión de la incertidumbre electoral. Para ello, ha necesitado garantizar el apoyo de las élites regionales y renunciar a un control exhaustivo sobre su gestión. De hecho, los resultados económicos del federalismo ruso no han sido muy alentadores, permitiendo que las élites regionales continúen dedicándose a la captura de las rentas disponibles (Blanchard & Scheiffer 2001) y estableciendo un acuerdo oculto que muestra el “shared interest of central and regional authorities in executive power concentration” (Heinemann-Grüder: 2002: 70). En los próximos años, sin embargo, la progresiva institucionalización de Rusia Unida podría configurar un control mucho más férreo sobre la autonomía de los gobernadores, a través de la figura ya establecida de los representantes presidenciales. En este sentido, el pacto centro-periferia establecido por Putin probablemente degenera en una dinámica de empoderamiento federal, en la que Rusia podría generar un modelo similar al del federalismo fiscal chino.

5. 4. Nigeria

Nigeria es, a día de hoy, uno de los países con mayor potencial de crecimiento en África. Alberga una población de 188 millones de habitantes, tiene una extensión de más de 900000 kilómetros cuadrados y, además, conserva unas reservas de petróleo que lo sitúan en la décima posición del ranking mundial. Pese a ello, el país es más conocido por sus conflictos civiles y étnicos que por su capacidad para constituirse como una potencia regional. La inestabilidad política ha marcado el desarrollo desde que el país lograra la independencia en 1960, con una trayectoria en la que se han sucedido dos golpes de estado (1966), una guerra civil

(1967-1970), y continuos cambios de gobierno en los que “the military has ruled 29 of 46 years” (Ogbonnia, 2007: 3). El denominador común de una gran parte de estos problemas ha sido, y continúa siendo a día de hoy, la extrema diversidad étnica existente en el país, y su correlato en un sistema federal que ha pasado de tres a treinta y seis estados en apenas seis décadas. La constitución de 1960 promovió la creación de entidades autónomas que, además de tener su propia carta magna, disponían de la posibilidad de asumir cualquier competencia que no estuviera asignada al ejecutivo central. El gobierno federal, por su parte, disponía del control exclusivo de los importantes recursos naturales del país.

De los casos seleccionados, Nigeria es, sin lugar a dudas, el que alberga una mayor complejidad étnica. Constituido como unidad política a través de la colonización británica, la creación de Nigeria implicaba la unión de una multitud de etnias, formadas a su vez por diversos grupos subétnicos, clanes, tribus, etc. En total, están contabilizados un total de 374 grupos étnicos, con importantes diferencias lingüísticas y dialectales, aunque todos ellos disponen del inglés como lengua vehicular. Entre las etnias predominantes, tres quintas partes de la población se dividen, casi a partes iguales, entre los Hausa, los Yoruba, y los Igbo. Un 11 % lo conforman los Fulani, mientras que los Ibibio y los Kanuri representan un 5 % cada uno. La religión mayoritaria es el islam, con un 43 % de seguidores, concentrados mayoritariamente en el área septentrional del país, donde predominan la conjunción de los Hausa-Fulani y los Kanuri. En torno a un 35 % se dividen entre las diferentes ramas del cristianismo: protestantes (15 %), católicos (8%), cristianos africanos (6'7%) y anglicanos (5%); predominantes en las áreas del sur del país, alrededor del Delta del Níger. En último término, un 19 % de la población mantiene la religión tradicional nigeriana.



Partidos e instituciones

Las primeras medidas tendentes a erradicar el carácter étnico de los partidos políticos se establecieron con la promulgación de la Constitución de 1979, encaminada a obligar a las formaciones políticas a tener un carácter interseccional. Entre otras obligaciones, los partidos debían tener una militancia abierta a cualquier etnia del país, evitar cualquier connotación geográfica o cultural en su nombre o logo, e incluir representantes de dos terceras partes de los estados en su comité ejecutivo. El incumplimiento de alguna de estas normas ha implicado que “between 1989 and 2002, electoral commissions denied registration to no less than 64 parties for failing to establish a national presence” (Bogaards, 2010: 730). De hecho,

durante la III República en 1983 el régimen militar denegó la inscripción de todos los partidos políticos, creando en su lugar dos partidos interétnicos: el *Social Democratic Party* (SDP) y la *National Republican Convention* (NRC). Pese a la corta duración de este régimen, la Constitución de 1999, ya bajo las reglas de un sistema democrático, mantuvo las mismas exigencias de entrada. Adicionalmente, se establecieron nuevos requisitos electorales, como el de obtener un porcentaje mínimo de votos en un número determinado de estados en las elecciones presidenciales.

La aplicación de estas medidas provocó que únicamente tres formaciones gozaran del carácter “nacional” prescriptivo para la participación en las elecciones: el *People's democratic party* (PDP), el *All Nigeria peoples party* (ANPP) y *Alliance for Democracy* (AD). De esa forma, se ha logrado mantener una fragmentación baja en el sistema de partidos, favoreciendo la configuración de un modelo bipartidista. En 2003, en las primeras elecciones legislativas tras el advenimiento de la democracia, la fragmentación era de 2'16, con PDP a gran distancia de ANPP, y AD como tercer partido. En 2007, el aumento del voto para el PDP y el descenso de ANPP supuso un bajada del NEPp hasta 1'75. En 2011 se produjo una subida hasta 2'69, debido a la pujanza de nuevos partidos como el *Action Congress of Nigeria* y el *Congress for Progressive Change*. Aún quedando lejos del 46% obtenido por el PDP, lograron una suma considerable de votos. En 2015 varios partidos de la oposición se unieron para formar la coalición *All Progressives Congress*, logrando ganar las elecciones e institucionalizando un bipartidismo puro en la Cámara de representantes, con un NEPp de 1'96.

El establecimiento de estas reglas de entrada al sistema de partidos no ha implicado, por el contrario, una mejora sustantiva en los niveles de institucionalización. Siguiendo una tendencia arraigada a nivel global, los partidos mantienen una débil disciplina interna, con frecuentes conflictos entre facciones que buscan la consecución de poder institucional. A pesar de que se haya disipado parcialmente el carácter étnico de los partidos, esto no ha supuesto su sustitución por componentes ideológicos o diferencias programáticas sustantivas, sino en la creación de un mercado electoral donde hay “investors, sellers, and consumers or buyers interacting to make the market functional” (Agbaje & Adejumobi, 2006: 40).

De hecho, tanto PDP como ANPP defienden una política económica liberal y medidas sociales conservadoras; además, el segundo tiene fuertes bases de apoyo en el norte, lo que le ha conminado a practicar una política cultural y religiosa más activa.

El recurso económico más deseado por las élites políticas nigerianas ha sido, sin lugar a dudas, el petróleo, factor motivador de la mayor parte de enfrentamientos políticos y sociales. Los estados situados en el Delta del Níger, donde se concentra mayoritariamente la producción petrolera del país, han perseguido una mayor participación económica en los beneficios derivados de su explotación, mientras que el gobierno federal ha buscado extraer estas rentas para su redistribución en el resto del país. A este respecto, es fundamental la influencia ejercida por los denominados *godfathers*, emprendedores políticos que controlan los procesos internos de los partidos y la elección de candidatos. A través de la financiación de las campañas electorales, los *godfathers* logran situar en puestos importantes a políticos afines, que posteriormente les devolverán el favor mediante la licitación de contratos de explotación del petróleo con los que financiarán nuevas campañas electorales. Los *godfathers* “hold neither elective political offices nor party positions” (Lewis, 2003: 40), y únicamente utilizan el vector étnico para movilizar a sus seguidores en la consecución de su propio interés económico.

Boko Haram y el conflicto religioso

En los últimos años, los niveles de conflicto han aumentado exponencialmente, principalmente a causa del surgimiento en 2009 del grupo islamista Boko Haram. Esta organización ha mantenido un enfrentamiento continuo con el estado, provocando más de veinte mil muertos y una fuerte inestabilidad social. El grupo encontró acomodo en los estados norteros del país, donde en 1999 se estableció una *Shari'a* de carácter moderado con el fin de contentar las reivindicaciones culturales de una parte de la población islámica. La organización comparte ideología y trayectoria con el movimiento *Maitatsine* que provocó graves disturbios en 1985, habiendo surgido ambos debido a “factors like economic dislocation, deprivation, and income inequalities, as well as poverty aided by local disasters” (Adesoji, 2010: 98).

Posiblemente nos encontremos ante un problema que trasciende el carácter de la configuración institucional del estado, si bien el diseño del que se ha dotado no ha contribuido a la resolución del problema. Por una parte, la “nacionalización” obligada de los partidos políticos fue articulada a través de la denegación de inscripción en el registro a quienes no cumplieran este requisito. En lugar de articular una agregación real de intereses, se optó por una medida que invisibilizaba el conflicto, sin proponer medidas para su resolución. Por otro lado, los problemas fundamentales que generan los enfrentamientos étnicos en Nigeria están relacionados con el control de los recursos petroleros; en muchas ocasiones, aquellos que “backed violent and revolutionary sects were politicians who needed the sect members violent disposition to achieve their political and, by extension, economic ends (Muogbo 2009). En 1993, los Andoni realizaron numerosos ataques contra poblaciones Ogoni, provocando el exilio de treinta mil personas. Los Ogoni habían articulado un importante movimiento social contra las prospecciones petroleras de *Shell*, el ataque no respondió a ninguna provocación previa, y se hizo con abundante armamento. Además, el presidente del estado de Ríos era un antiguo ejecutivo de la empresa británica, lo que apunta a una dirección bastante clara en la causa de los acontecimientos (Naanen 2008).

El propio líder de *Boko Haram*, Muhammad Yusuf, asesinado por el gobierno en 2009, había tenido unas dilatadas relaciones con los líderes políticos de varios estados del norte del país. El movimiento ha recibido un notable apoyo económico por parte de líderes religiosos y empresarios, lo que le ha permitido extender sus redes y configurar algunas instituciones de asistencia social, amén de constituirse como antagonista de la población cristiana. Parece claro que “while institutional engineering has thus contributed to a national party system, it has not eradicated ethnic violence or transformed the underlying dynamics of patronage politics” (Boogards, 2010: 742); a día de hoy, los partidos nigerianos continúan participando en la financiación de grupos terroristas, en la apropiación de los recursos naturales y en la promulgación de leyes discriminatorias contra las minorías religiosas.

6. Conclusiones

Iniciábamos esta investigación con el objetivo de contrastar, de manera

contrafáctica, la hipótesis de que los partidos regionales aumentan los niveles de conflicto étnico en los países democráticos con sistemas de gobierno federal. Considerábamos que la verificación o refutación de esta paradoja podía ponerse a prueba si elegíamos un contexto institucional diferente. Por ello, realizamos una selección de casos en la que únicamente estaban presentes países autoritarios o de autoritarismo competitivo con sistemas descentralizados y ciertos niveles de diversidad étnica. Además, proponíamos comparar modelos federales con medidas de centralización política, el denominado “federalismo coercitivo”, y modelos en los que estas medidas no estuvieran presentes, a los que William Riker nombraba como “federalismos periféricos”. Esperábamos, en primer lugar, que hubiera diferencias sustanciales entre los diferentes modelos analizados y, en segundo término, que la presencia o ausencia de partidos regionales no fuera determinante, toda vez que su papel podía ser adoptado por otros actores interesados en recoger los frutos de la descentralización.

La primera premisa se cumplió razonablemente bien, toda vez que hemos encontrado diferencias reseñables en los niveles de centralización política de las diferentes federaciones, así como en la variedad de herramientas que se aplican en cada una de ellas. El federalismo ruso y el malayo obtienen resultados muy altos en los niveles de centralización, hasta el punto de que podríamos cuestionar si existe una verdadera autonomía política para las élites regionales. En Rusia los gobernadores siguen detentando un cierto control económico, pero la progresiva reducción de su esfera de acción política podría llevar a un recrudescimiento del modelo. Por su parte, Malasia sí dispone de partidos regionales, pero en los escasos estados en que gobernaron antes de 2008 (Sabah y Kelantan), sufrieron la presión continua de la coalición gobernante en el estado: la malaya *Barisan Nasional*. A la vista de los resultados, considero que el hecho fundamental que mitigó los niveles de conflicto étnico entre la población malaya, china e hindú fue el carácter multiétnico de *Barisan Nasional*, que recogía en su seno un partido étnico chino y otro hindú. El descalabro del voto chino e hindú a esta coalición en 2018 puede, por el contrario, provocar una “malayización” de UMNO y *Barisan Nasional*, aumentando el nivel de confrontación étnica en un futuro cercano.

Nigeria e Indonesia recogían, por el contrario, peores rendimientos en cuanto

a los niveles de centralización política. Con altos niveles de fragmentación parlamentaria y una pobre institucionalización de los partidos políticos, era de esperar que los problemas de convivencia entre las diversas etnias fueran solucionados de forma violenta. En ambos casos nos ha sorprendido la inexistencia de partidos regionales, prohibidos formal y factualmente en ambos casos, si bien en el caso del país asiático se justifica por la preeminencia del nivel local en la recepción de competencias. Aunque ambos casos compartían una historia plagada de trágicos episodios de violencia con millones de víctimas, Indonesia ha logrado superar parcialmente estas dificultades, mientras que Nigeria continúa enfrascada en un sangriento conflicto con la organización *Boko Haram*. Esto nos muestra que, en ausencia de partidos regionales, y manteniéndose los incentivos que determinarían la participación de estos, otros actores corren prestos a ocupar su lugar. En términos materiales, la invisibilización de las etnicidades nigerianas a través de la vía legislativa no ha evitado que las élites regionales continúen enfrentándose por el control de los recursos naturales.

La inclusión de Rusia en la investigación nos ha supuesto algunos problemas metodológicos, dado que sus niveles de diversidad étnica estaban demasiado alejados de los otros casos seleccionados. De esta forma, la inexistencia de conflictos étnicos en este país no puede ser achacada, a priori, a las herramientas de centralización política de las que se dota. Excluyendo este caso, podemos encontrar algunas conclusiones desde las que podríamos construir nuevas vías de investigación. En primer lugar, resulta interesante confirmar que los partidos regionales no son los únicos depositarios posibles de los recursos resultantes de la descentralización administrativa. El caso de los gobernadores rusos en la década de los noventa, los cargos locales en Indonesia elegidos a través del sistema de *pilkada*, o los *godfathers* nigerianos que controlan e influyen en los partidos estatales, etc; todos ellos son actores que difícilmente habríamos imaginado que pudieran jugar un papel destacado en un modelo federal. Una segunda conclusión la debemos hacer con respecto a la efectividad de las medidas centralizadoras. Reducir la fragmentación del sistema de partidos, llegando hasta la prohibición de los partidos regionales, parece una medida tentadora para los gobernantes que hayan leído superficialmente la paradoja propuesta por Brancati. A medio plazo, sin

embargo, no parece una medida especialmente efectiva para reducir el conflicto étnico, ya que este puede adoptar otras formas fuera del marco institucional. La institucionalización de los partidos políticos, por el contrario, sí parece dar resultados positivos. La existencia de organizaciones consolidadas, extendidas por todo el territorio, y con una vocación de representación multiétnica parece favorecer el establecimiento de una agenda interseccional en la que los diferentes grupos étnicos presentes puedan sentirse representados.

En definitiva, ante la más que probable expansión de las políticas federales por todo el planeta, parece claro que muchos de sus nuevos receptores serán estados autoritarios o semidemocráticos. Por esta razón, se impone la necesidad de que los investigadores amplíemos nuestro ámbito de actuación, flexibilizando nuestros marcos de análisis de forma que podamos incluir las particularidades y retos a los que se enfrenta el federalismo autoritario en este siglo.

7. Bibliografía

Adesoji, Abimbola (2010), "The Boko Haram uprising and Islamic revivalism in Nigeria", *Africa Spectrum*, Vol. 45, No. 2 , pp. 95-108.

Agbaje, Adigun & Adejumobi, Said (2006), "Do votes count? The travails of electoral politics in Nigeria", *Africa Development*, Vol. XXXI, No. 3, pp. 25–44.

Anderson, Liam (2015), "Ethnofederalism and the management of ethnic conflict: assessing the alternatives", *The Journal of federalism*.

Aragon, Lorraine V. (2001), "Communal violence in Poso, Central Sulawesi: Where people eat fish and fish eat people", *Indonesia*, No. 72 (Oct., 2001), pp. 45-79.

Benz, Arthur & Kropp, Sabine (2014), "Federalism in democracies and autocracies: compatibilities, incompatibilities and dynamics", *Paper to be presented at the 23rd IPSA World Congress 2014 'Challenges of Contemporary Governance' Montreal July 19-24*.

Blanchard, Olivier & Shleifer, Andrei (2001), "Federalism with and without political centralization: China versus Russia", *IMF Staff Papers; 2001; 48, ProQuest Central pg. 171*.

Bogaards, Matthijs (2010), "Ethnic party and institutional engineering in Nigeria", *School of Humanities and Social Sciences*, Vol. 17, No. 4, 730–749.

Brancati, Dawn (2006), "Decentralization: Fueling the fire or dampening the flames of ethnic conflict and secessionism?", *International Organization*, Vol. 60, No. 3, pp. 651-685.

Breen, Michel G., (2016) "The origins of holding-together federalism: Nepal,

Myanmar, And Sri Lanka”, *The Journal of Federalism* volume 0 number 0, pp.1-25.

Busygina, Irina & Filippov, Mikhail & Taukebaeva, Elmira (2018), “To decentralize or to continue on the centralization track: the cases of authoritarian regimes in Russia and Kazakhstan”, *Journal of Eurasian studies*.

Edwards, Ronald A. (2009), “Federalism and the balance of power: China's Han and Tang dynasties and the Roman Empire”, *Pacific Economic Review*.

Faguet, Jean-Paul (2013), “Can subnational autonomy strengthen democracy in Bolivia”, *The Journal of Federalism* volume 44 number 1, pp. 51.

Filippov, Mikhail (2005), “Riker and Federalism”, *Constitutional Political Economy*, 16, 93–111.

Forestier-Peyrat, Etienne (2017), “Soviet federalism at work: lessons from the history of the transcaucasian federation 1922-1936”, *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas* 65, H. 4, S. 529–559 Franz Steiner Verlag GmbH.

Golosov , Grigorii V. (2011), “The Regional Roots of Electoral Authoritarianism in Russia”, *Europe-Asia Studies*, 63:4, 623-639.

Andreas Heinemann-Grüder, Andreas (2002), “Is Russia's federalism sustainable?”, *Perspectives on European Politics and Society*, 3:1, 67-91, DOI: 10.1080/15705850208438829.

Jehan Paju Dale, Cypri (2015), “Emancipatory democracy and political struggles in post-decentralization eastern Indonesia”, *Society for International Development* 1011-6370/15, 58(1), (31–41).

Jinadu, L. Adele (1985), “Federalism, the consociational state, and ethnic conflict in Nigeria”, *The Journal of Federalism*.

Kok Wah Loh, Francis (2010), "Restructuring Federal-State relations in Malaysia: From centralised to co-operative federalism?", *The Round Table*, 99: 407, 131-140.

Lewis, Peter (2003), "Nigeria: Elections in a fragile regime", *Journal of Democracy*, Volume 14, Number 3, pp. 131-44.

Means, Gordon P. (1968), "Eastern Malaysia: The politics of federalism", *Asian Survey*, Vol. 8, No. 4, pp. 289-308.

Mietzner, Marcus (2009), "Indonesia's 2009 elections: populism, dynasties and the consolidation of the party system", *Lowy Institute for international policy*.

Mietzner, Marcus (2014), "How Jokowi Won and Democracy Survived", *Journal of Democracy* Volume 25, Number 4 October.

Montinola, Gabriella & Qian Yingyi & Weingast, Barry R. (1995), "Federalism, Chinese style: The political basis for economic success in China", *World Politics*, Vol. 48, No. 1, pp. 50-81.

Naanen, Ben (1995), "Oil-producing minorities and the restructuring of Nigerian federalism: The case of the Ogoni people", *The Journal of Commonwealth & Comparative Politics*, 33:1, 46-78, DOI: 10.1080/14662049508447695.

Morales, Javier (2012), *Rusia en la Sociedad Internacional. Perspectivas tras el retorno de Putin*, Unidad de Investigación sobre Seguridad y Cooperación Internacional.

Ogbonnia, Ken Sylvester (2007), "The Political Party System and Effective Leadership in Nigeria: A Contingency Approach", *Walden University*.

Ostwald, Kai & Tajima, Yuhki & Samphantharak, Krislert (2016), "Indonesia's

decentralization experiment. Motivations, successes, and unintended consequences”, *Journal of Southeast Asian Economies* Vol. 33, No. 2 (2016), pp. 139–56.

Ostwald, Kai (2017), “Federalism without decentralization: power consolidation in malaysia”, *University of British Columbia*.

Reuter, Johan Ora (2010), “The politics of dominant party formation: United Russia and Russia's governors”, *Europe-Asia Studies*, 62:2, 293-327, DOI: 10.1080/09668130903506847.

Roosa, John (2006), “Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia”, *Madison, Wisconsin: University of Wisconsin Press*.

Rose-Ackerman, Susan (2010), “Corruption: Greed, Culture and the State”, *Yale Law Journal Online*, Vol. 120, pp. 125-140.

Ross, Cameron (2000), “Federalism and democratization in Russia”, *Communist and Post-communist studies* 33, 403-420.

Singh, H. (2001), “Ethnic Conflict in Malaysia Revisited”, *Commonwealth & Comparative Politics*, 39:1, 42-65, DOI: 10.1080/713999532.

Smith, Benjamin (2008), “The origins of regional autonomy in Indonesia: Experts and the marketing of political interests”, *Journal of East Asian Studies*, ProQuest Central pg. 211.

Sorens, Jason (2005), “The cross-sectional determinants of secessionism in advanced democracies”, *Comparative political studies*, Vol. 38 No. 3, April 2005 304-326.

Starodubtsev, Andrey (2013), "Decentralize but not federalize: the authoritarian pattern of regional policy", *Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Center for Modernization Studies*.

Stuart Mill, John (1861), "*Utilitarianism*", London: Parker, Son & Bourn, West Strand.

Tomsa, Dirk (2014), "Party system fragmentation in Indonesia: The subnational dimension", *Journal of East Asian Studies*.

Ufen, Andreas (2006), "Political parties in post-Suharto Indonesia: Between politiki aliran and 'Philippinisation'", *GIGA German Institute of Global and Area Studies* .

Varshney, Ashutosh & Panggabean, Rizal & Zulfan Tadjoeeddin, Mohammad (2004), "Patterns of Collective violence in Indonesia (1190-2003)", *United Nations Support Facility for Indonesian Recovery*.

Weingast, Barry W. (1995), "The economic role of political institutions: Market-preserving federalism and economic development", *Journal of law, Economics, & Organization*, Vol. 11, No. 1, pp. 1-31.

Yeoh, Tricia (2011), "What's in the Budget for State Governments", *Penang Monthly*.